

Bogotá, D.C.
543

MEMORANDO

PARA: **MIGUEL EDUARDO PARRA CORVACHO**
Jefe Oficina Asesora Jurídica Secretaría Distrital de Gobierno (E)

DE: **CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA**
Alcalde Local de San Cristóbal

ASUNTO: **ACCIÓN DE TUTELA No. 2026 -142**
JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

ACCIONANTE: **ANA PATRICIA BAQUERO BOGOTÁ**

ACCIONADOS: LA INSPECCIÓN 4 D POLICÍA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

VINCULADOS: PERSONERÍA DE BOGOTÁ, SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTÁ, POLICÍA NACIONAL, ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

RADICADO: ORFEO No. 20264211326222

ANTECEDENTES

La señora **ANA PATRICIA BAQUERO BOGOTÁ** presenta acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso. Manifiesta que interpuso querrela por perturbación a la posesión desde el 16 de enero de 2026, que por reparto correspondió a la Inspección 4D de Convivencia y Paz de San Cristóbal bajo el expediente No. 2026544490100010E y que a la fecha el procedimiento no ha tenido impulso procesal alguno, pese a la petición radicada y las múltiples llamadas telefónicas al despacho para el efecto.

HECHOS

El despacho de la Alcaldía Local de San Cristóbal se abstiene de pronunciarse respecto a los hechos relatados en el escrito de tutela, toda vez que son ajenos a nuestra competencia y conocimiento, en atención a que hacen referencia a un proceso policivo por perturbación, que cursa en la Inspección 4D de Convivencia y Paz de la Localidad.

Ahora bien, se precisa al despacho que las Inspecciones de Convivencia y Paz – antes Inspecciones de Policía- son organismos autónomos administrativa y funcionalmente, por lo que no hay subordinación respecto de esta Alcaldía Local, de tal suerte que los Inspectores cuentan con independencia para adelantar los procesos policivos que son sometidos a su conocimiento mediante reparto, pues su sujeción es con relación al procedimiento previsto en la Ley 1801 de 2016 y las garantías constitucionales del debido proceso. En ese sentido, y como quiera que aun no se ha proferido decisión de fondo respecto de la perturbación de la posesión alegada por la accionante, se pone a consideración del despacho que debe estar sujeta a lo que resuelva, lo que en derecho corresponda, la inspección de policía y conforme a las etapas procesales previstas en la Ley 1801 de 2016.

PRETENSIONES

La señora **ANA PATRICIA BAQUERO BOGOTÁ**, relaciona en su escrito de tutela, las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Declárese procedente la acción de tutela como consecuencia, tutélese mis derechos fundamentales DEBIDO PROCESO, CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, consagrados en la Constitución Política de Colombia.

SEGUNDO: Como consecuencia de tutelárseme mis DERECHOS FUNDAMENTALES DEL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, solicito se ordene a LA INSPECCIÓN 4 "D" POLICÍA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, darle impulso procesal de forma inmediata a la querrella instaurada desde el pasado 13 de enero de 2026” (Sic)

EXCEPCIONES PROPUESTAS

I. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Al respecto se debe tener en cuenta que la Constitución Política, en el artículo 121, dispone:

“Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.”

En tal sentido, respetuosamente solicito al señor juez, tener en cuenta el principio de competencia administrativa emanado de la Ley 489 de 1998, por el cual cada organismo y entidad pública debe ejercer las potestades y atribuciones inherentes a la labor que desarrolla en virtud de los parámetros normativos; de la misma forma y en virtud del principio de coordinación, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones.

En el caso particular de los Alcaldes Locales, se debe tener en cuenta las competencias contenidas en el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 2116 de 2021. De tal manera que no es dable ordenar cumplimiento alguno, por cuanto las pretensiones recaen en la Inspección 4D de Convivencia y Paz de la localidad, en lo que respecta agotar el procedimiento

contemplado en la norma y de tal manera agotar las etapas procesales previstas hasta tomar una decisión de fondo dentro de la querella interpuesta por la accionante; aspecto que no es inmediato en virtud de la naturaleza misma del proceso y del derecho de turno para darle trámite a las querellas que son sometidas a reparto entre los inspectores de Convivencia y Paz de la localidad.

Es por ello que en forma respetuosa se solicita declarar la “**FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA**”, como quiera que a pesar de la informalidad que caracteriza la acción de tutela, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido la existencia de unos requisitos mínimos de procedibilidad, los cuales deben encontrarse satisfechos para que el juez constitucional pueda entrar a resolver de fondo los casos que sean allegados a su despacho.

La acreditación de la legitimación en la causa de las partes para actuar procesalmente, ya sea en calidad de accionante (legitimación por activa) o de accionado (legitimación por pasiva), es uno de los requerimientos que deben ser objeto de análisis por el juez de tutela frente a cada asunto sometido a su consideración; por tanto, la legitimación por pasiva dentro del trámite de la acción de tutela hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso.

Diferentes decisiones sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva se pueden consultar en las sentencias: T-462 DE 1996; Auto No. 312 del 2001; T-519 del 2001; T-1001 del 2006 de la Honorable Corte Constitucional; Consejo de Estado, en decisión adoptada en el proceso con radicado 76001-23-25-000-1997-03056-01.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-1015 de 2006, MP. Dr. ALVARO TAFUR GALVIS, indicó:

“(…) Por ello, la Corte Constitucional ha señalado que no se debe actuar con excesivo rigor en el análisis de los requisitos formales de la demanda, en perjuicio de la protección debida a los derechos fundamentales en juego. Además, se ha pronunciado frente al deber irrenunciable del juez de tutela en la integración del contradictorio, cuando considera que la demanda se dirige contra quien no está llamado a responder por la vulneración del derecho fundamental. En ese sentido ha dicho que “en virtud de la oficiosidad e informalidad que orientan el proceso de tutela, esta no puede ser denegada con base en argumentos de tipo formalista o en factores que pueden ser fácilmente superados por decisiones del juez constitucional, ya que, entre sus deberes se encuentra el de vincular al trámite de la acción, a todos aquellos que por disposición legal y constitucional puedan resultar comprometidos en la afectación de los derechos fundamentales del accionante o de sus representados. (…)” (subrayado y negrilla fuera de texto)

Con lo anterior se evidencia la abundante jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en la que se pronuncia frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva; es esta la razón por la que al advertir que la Alcaldía Local de San Cristóbal no es responsable de la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionante, no puede ser sujeto pasivo de la acción de tutela, pues no existe nexo de causalidad entre la vulneración y la actuación activa u omisiva por parte de la accionada.

PETICIÓN

Conforme a los argumentos expuestos en la presente respuesta a la acción de tutela, con el debido respeto solicito:


Declarar la improcedencia de la acción de Tutela en contra de la Alcaldía Local de San Cristóbal, en virtud de la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se solicita la DESVINCULACIÓN del trámite tutelar.


Atentamente.


CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA

Alcalde Local De San Cristóbal

Alcalde.scrisobal@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Laura Alejandra Guarnizo Cascavita CPS 597-2026 

Revisó: Cindy Stefany Heredia – CPS 300-2026- 

Revisó: Fernando Andrés Carvajal Molina CPS-122- 